La Construcción de Modelos de Redacción de Sentencias con Perspectiva Ciudadana y Lectura Fácil: Hacia una Justicia más Incluyente

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debería garantizarse para todas las personas, sin importar su condición socioeconómica, educativa o de discapacidad, identidad de género, sexo, color de piel o cualquier otra circunstancia o característica que atente contra su dignidad humana. En la práctica, las barreras para comprender del lenguaje jurídico y el acceso a los mecanismos judiciales—incluidas las resoluciones—dificultan el ejercicio pleno de este derecho, lo que implica una preocupante realidad que debemos transformar con nuestro accionar diario.

¿Qué ocurre y qué sensaciones experimentamos cuando percibimos que la justicia es inalcanzable? ¿Cuándo la justicia, en lugar de ser un pilar de igualdad, equidad y acceso, se convierte en un camino tortuoso? ¿Cuándo el lenguaje jurídico se transforma en una barrera en lugar de ser un puente hacia la verdad y la reparación? Estos son algunos de los cuestionamientos que nos invitan a repensar el verdadero propósito de la justicia y el impacto que tiene en la vida de las personas y la labor desde nuestros espacios para contribuir eficientemente a eliminar las brechas de desigualdad.

La justicia debería ser clara, accesible y comprensible para todas las personas, pero aún enfrentamos desafíos para que así sea, nos encontramos con un sistema que, en ocasiones, se percibe distante: resoluciones cargadas de tecnicismos, procesos burocráticos que dificultan el acceso y una falta de cercanía humana en su aplicación. Es fundamental replantear la justicia como un espacio abierto, donde el conocimiento no sea visto como un privilegio, sino como un derecho al servicio de todas las personas, promoviendo así una sociedad más justa, igualitaria bajo los principios de interseccionalidad, equidad y accesibilidad.

¿Por qué el acceso a la justicia sigue siendo un desafío? ¿Por qué muchas personas se enfrentan a un sistema que parece hablar un idioma inaccesible? La respuesta no es sencilla a lo largo del tiempo, las normas y procedimientos han evolucionado con el propósito de garantizar el orden y la eficiencia, pero en ese proceso, a veces se ha dejado de lado el valor de la empatía y la escucha. La justicia no debería reducirse a expedientes o sentencias, sino reconocer las historias de vida que hay detrás de cada caso, construir un sistema más humano, accesible y comprensible es un reto, pero también una oportunidad para reivindicar su verdadero propósito: servir a todas las personas sin distinción, prejuicios ni discriminación.

La percepción de lejanía de la justicia, la dificultad en el acceso a sus mecanismos y la falta de un trato equitativo siguen siendo desafíos presentes en nuestra sociedad. En este contexto, la redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y en lectura fácil se convierte en una herramienta clave para hacer más accesible la información judicial y garantizar un verdadero acceso a la justicia, que

la ciudadanía logre percibir las acciones permanentes y constantes que las instituciones trabajan por mejorar, justamente este ensayo aborda la importancia de adoptar estos modelos de redacción desde un enfoque de inclusión, accesibilidad y derechos humanos, con el objetivo de fortalecer la equidad y la confianza en el sistema judicial.

Aún persiste una forma tradicional de impartir justicia, donde las resoluciones se redactan en términos poco accesibles para la ciudadanía, lo que genera una brecha en el acceso al conocimiento jurídico, dificultando que quienes más lo necesitan puedan comprender y ejercer plenamente sus derechos. Garantizar un lenguaje claro y accesible en los procesos judiciales no solo fortalece la confianza en la justicia, sino que también contribuye a la inclusión de grupos históricamente discriminados, promoviendo un sistema más equitativo y cercano a la sociedad.

Soy una convencida de que es posible construir un sistema de justicia que no solo sea imparcial, sino también accesible y humano, dotado no solo de un proceso más amigable desde lo que nos permite la ley, sino con la emisión de resoluciones entendibles, que las personas con discapacidad cuenten con formatos accesibles, que las comunidades indígenas puedan recibir información en su lengua, que las víctimas de violencia encuentren un verdadero respaldo en las instituciones. Porque la justicia no solo debe impartirse, sino también sentirse.

Para lograrlo, necesitamos judicaturas, magistraturas y personal que comprendan que el poder de la justicia radica en su capacidad de transformar vidas, no en su inaccesibilidad. Necesitamos un cambio de mentalidad donde el conocimiento se comparta, donde la ciudadanía tenga herramientas para defender sus derechos y donde cada resolución tenga en cuenta la realidad de quienes la reciben.

Las instituciones que se dedican a la impartición de justicia deben ser espacios de acceso real, no castillos cerrados, es fundamental evitar que las formas históricas de discriminación y exclusión se sigan reproduciendo en el derecho. La justicia no puede tratar a las personas como simples números en un expediente, sino como seres humanos con derechos, dignidad y voz, nos corresponde contribuir a la construcción y fortalecimiento de un sistema más accesible y humano es un compromiso ineludible para garantizar la igualdad sustantiva.

El lenguaje jurídico tradicionalmente se ha caracterizado por su complejidad, tecnicismos y estructuras sintácticas que dificultan su comprensión, asimilación y acceso, característica que excluye de manera indirecta a ciertos sectores de la población, como personas con discapacidad intelectual, personas con bajo nivel de alfabetización, hablantes de lenguas indígenas, adultas mayores y personas en situación de vulnerabilización. En este contexto, adoptar una redacción clara y accesible en las sentencias judiciales en el caso que nos ocupa en la materia electoral, no es solo una mejora en la comunicación, sino una necesidad

fundamental para garantizar que todas las personas puedan comprender y ejercer sus derechos de manera efectiva.

Garantizar el acceso a la justicia implica reconocer a las personas como protagonistas de su propia defensa y ejercicio de derechos, nos ocupa ir más allá de los modelos tradicionales que priorizan la intermediación y apostar por un enfoque que fortalezca la autonomía y la independencia de cada una en la toma de decisiones que le afectan. La claridad en la comunicación jurídica no solo facilita el acceso a la información, sino que también empodera a la ciudadanía para ejercer sus derechos de manera informada, libre y sin depender de terceras personas para comprender los procesos que impactan su vida.

La perspectiva ciudadana en la impartición de justicia implica garantizar accesibilidad no solo en los procedimientos, sino también en la manera en que se comunican las resoluciones, particularmente en materia electoral. Esto requiere que las sentencias se redacten pensando en las necesidades de la población a la que van dirigidas, utilizando un lenguaje claro y comprensible, evitando tecnicismos innecesarios y organizando la información de forma lógica, resaltando las ideas clave, incorporando elementos visuales, resúmenes y formatos accesibles que permiten que todas las personas, sin importar su formación o condición, puedan comprender y ejercer sus derechos de manera autónoma e independiente.

El derecho internacional ha reconocido la importancia de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, estableciendo lineamientos claros sobre la accesibilidad en los procesos judiciales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, establece en su artículo 9 la obligación de los Estados Parte de asegurar la accesibilidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo la información y la comunicación, lo cual implica que las resoluciones judiciales deben ser redactadas de manera que sean comprensibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas o educativas (Naciones Unidas, 2006).

El artículo 13 de la misma convención enfatiza el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, lo que requiere que los procedimientos legales, incluidas las sentencias, sean accesibles y comprensibles (Naciones Unidas, 2006). Así mismo, la Observación General No. 2 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad subraya la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la accesibilidad cognitiva en los procesos judiciales.

En Europa, la Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público establece la necesidad de que la información judicial sea

accesible a través de medios digitales, promoviendo el uso de lectura fácil y formatos alternativos para personas con discapacidad (Unión Europea, 2016).

Un caso relevante que ejemplifica la aplicación de estos principios es la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, España, en la que se redactó una resolución en lectura fácil para facilitar su comprensión por personas con discapacidad intelectual o dificultades lectoras. Esta sentencia fue considerada un avance en la accesibilidad de la justicia y marcó un precedente en la incorporación de la lectura fácil en los procesos judiciales (Cadena SER, 2024).

El reconocimiento del acceso a la justicia como un derecho fundamental dentro del derecho internacional ha impulsado la adopción de medidas concretas para garantizar la accesibilidad en los procesos judiciales, tanto los tratados internacionales como las legislaciones regionales han enfatizado la necesidad de que la información jurídica sea comprensible para todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas o nivel educativo. La evolución en este ámbito no solo ha sido normativa, sino también práctica, como lo demuestra la implementación de sentencias en lectura fácil y el uso de formatos accesibles en diversas jurisdicciones, estos avances reflejan un cambio progresivo hacia un modelo de justicia más inclusivo, en el que el lenguaje y la comunicación clara se reconocen como herramientas esenciales para el ejercicio pleno de los derechos.

Cuando el lenguaje jurídico es comprensible, la percepción de opacidad y burocracia en los procesos judiciales, especialmente en materia electoral, se reduce significativamente, utilizarlo en las sentencias no solo facilita la comprensión, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, permitiéndole percibirlo como un espacio transparente y cercano a sus necesidades. La legitimidad de las decisiones judiciales se refuerza cuando las personas pueden entender, sin intermediarios, las razones detrás de cada resolución.

La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y en lectura fácil es un paso esencial para una justicia verdaderamente accesible e incluyente. Esta estrategia permite eliminar barreras en el acceso a la información judicial, asegurando que todas las personas, sin importar sus condiciones, puedan comprender y ejercer plenamente sus derechos, la justicia no solo debe ser imparcial y equitativa, sino también clara y comprensible para quienes recurren a ella, fortaleciendo así la confianza en el sistema y garantizando su legitimidad.

Cerrar la brecha entre el derecho y la ciudadanía no es una tarea sencilla, pero es una responsabilidad ineludible. Apostar por una justicia accesible es apostar por una sociedad más democrática, donde el conocimiento jurídico no sea un privilegio, sino un derecho al alcance de todas las personas.

Bibliografía

Asamblea de las Naciones Unidas (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

Cadena SER. (2024). *Un juzgado de lo social emite una sentencia pionera por ser fácil de interpretar para personas con discapacidad intelectual o poca comprensión lectora*. Disponible en <https://cadenaser.com/galicia/2024/12/03/en-juzgado-de-lo-social-emite-una-sentencia-pionera-por-ser-facil-de-interpretar-para-personas-cno-discapacidad-intelectual-o-poca-comprension-lectora-radio-vigo/>

Unión Europea. (2016). *Directiva 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/>